

La sociedad palestina en el nuevo contexto de Oriente Próximo

Antoni Segura

Vicedirector

Centre d'Estudis Històrics

Internacionals

Universidad de Barcelona

Desde julio de 2002 hasta junio de 2003 la sociedad palestina ha seguido sufriendo las consecuencias del conflicto palestino-israelí, condicionado por factores externos e internos relacionados con la política del Gobierno de Ariel Sharon y de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Entre los primeros destaca la nueva situación creada en Oriente Próximo con la ocupación de Irak y los intentos del Cuarteto (ONU, EE UU, UE y Rusia) para hallar una salida al conflicto con la aplicación de la Hoja de Ruta. La forma en que se llevó a cabo la ocupación de Irak, sin una resolución explícita de la ONU que la legitimara, ha desencadenado una creciente oleada de antiamericanismo y antioccidentalismo en el mundo musulmán, que alimenta las corrientes más radicales del fundamentalismo confesional y que obstaculiza una salida política para el conflicto. De ahí las escasas posibilidades con que cuenta la Hoja de Ruta para abrirse paso y la amenaza de que se convierta en una declaración más de buenas intenciones sin una aplicabilidad real sobre el terreno. Una Hoja de Ruta que, por otro lado, señala las líneas generales de un nuevo proceso de paz, pero que no aporta una solución para las cuestiones que están por resolver (fronteras definitivas, viabilidad territorial del Estado palestino, colonos, refugiados, Jerusalén...), a excepción de fijar un calendario, que queda obsoleto, y la necesidad de garantizar el legítimo derecho a la seguridad de Israel. La actitud

de Ariel Sharon y de Yasser Arafat no ha ayudado a consolidar las esperanzas depositadas en dicha Hoja de Ruta.

A nivel interno, el incremento de la violencia y la construcción del muro han radicalizado las posiciones de dos sociedades conmocionadas por los efectos perversos del terrorismo y por las acciones represivas del ejército y del Gobierno de Israel. Entre julio de 2002 y junio de 2003 se han producido un mínimo de cincuenta ataques suicidas palestinos y decenas de operaciones militares israelíes en los territorios ocupados, con un balance de más de 200 muertos israelíes y 300 palestinos, y un mínimo de 1.000 heridos entre las dos comunidades. A pesar de que el número de víctimas parecía disminuir la escalada de violencia proseguía, según recogía el informe de la ONU de 1 de agosto de 2002, que señalaba que, entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de 2002, 497 palestinos y más de 100 israelíes perdieron la vida. Pero lo más grave es que, como afirmaba un informe de Amnistía Internacional, desde septiembre de 2000 (comienzo de la segunda Intifada) a septiembre de 2002, 250 niños palestinos habían muerto a consecuencia de acciones de respuesta militar israelí, calificadas de «excesivas y desproporcionadas», y 72 niños israelíes murieron por ataques «directos e indiscriminados» por parte de los grupos radicales palestinos. Estos niveles de violencia son insostenibles y sólo contribuyen a radicalizar aún más las posiciones y a obstaculizar las nuevas propuestas en vistas a reabrir el proceso de paz.

Este año la sociedad palestina se ha visto de nuevo conmocionada por las acciones del ejército israelí en los territorios ocupados (asesinatos selectivos

que causan daños colaterales en la población civil, expulsiones, derribo de casas, destrucción de infraestructuras, aislamiento militar de localidades palestinas, prohibición a los palestinos de construir viviendas en zonas destinadas a futuros asentamientos israelíes, etc.), que contribuyen a reducir la credibilidad de la Hoja de Ruta y a dar argumentos a los grupos radicales que no contemplan otra salida que la de la lucha armada y la de los atentados suicidas. Un informe de Amnistía Internacional del 3 de noviembre de 2002 no dudaba en acusar a las Fuerzas de Defensa de Israel de cometer «crímenes de guerra, matanzas injustificadas y torturas, y de utilizar a civiles palestinos como “escudos humanos” en las ofensivas contra Yenín y Nablús de abril de 2002». Dos días antes, un informe de la organización Human Rights Watch describía los ataques suicidas palestinos contra civiles israelíes como crímenes contra la humanidad y responsabilizaba moral y políticamente a Arafat de esos ataques. La población palestina se ve también conmocionada y humillada por la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania y por la construcción del muro. Según un informe publicado el 6 de octubre de 2003 por el diario independiente israelí *Haaretz*, en el transcurso de 2002 se vendieron 1.000 nuevas unidades de viviendas para familias israelíes en los territorios ocupados. El precio de dichas viviendas, que están parcialmente subvencionadas por el Gobierno, es muy inferior al de otras de similares características situadas en territorio de Israel, lo cual explica el incremento del número de colonos en los últimos años. Según el Ministerio del Interior israelí, desde la firma de los Acuerdos de Oslo, el total de colo-

nos en los territorios ocupados (sin contar Jerusalén Este) ha pasado de 103.600 en 1993 a 231.443 en 2003, siendo la evolución de los últimos años la siguiente: en 1999, 188.100; en 2000, 203.000; en 2001, 213.700; en 2002, 226.000, y en 2003, 231.443. Ello representa un incremento del 23 % en cinco años, es decir, un 4,6 % anual. La construcción de nuevos asentamientos y de las infraestructuras necesarias para su mantenimiento (carreteras, electricidad, escuelas, conducciones de agua...) no sólo exaspera a la sociedad palestina, que ve en ella una reedición de la política de ocupación similar a la de antes de 1948, sino que incrementa los gastos en defensa e infraestructuras del Gobierno israelí y se erige en un obstáculo político y económico para proceder algún día a la retirada de los territorios ocupados. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2002, el primer ministro israelí, mostrándose insensible ante las demandas internacionales que exigen una congelación de los asentamientos para favorecer el proceso de paz, anunciaba la expansión de nuevos asentamientos en la ciudad de Hebrón. De hecho, según decía el 4 de diciembre de 2002, Ariel Sharon sólo contempla la existencia de un Estado palestino provisional sobre el 42 % de Cisjordania y el 70 % de Gaza, excluyendo a las regiones que considera esenciales para la seguridad de Israel. Manifestaciones como éstas desacreditan la Hoja de Ruta y exasperan aún más a la opinión pública palestina, que teme que su futuro Estado se reduzca a poco más del 10 % del antiguo mandato británico de Palestina y a un conjunto de zonas sin continuidad territorial y, por tanto, económica, social y políticamente inviable. En junio de 2002, cerca de la localidad de Sallem, el Gobierno de Ariel Sharon empezó a construir un muro para rodear Cisjordania. Se trataba de un viejo proyecto que arrancaba de la época de Isaac Rabin y que contaba con la aprobación de Ehud Barak. Para Israel constituye una «cerca de seguridad» que impedirá las infiltraciones de terroristas palestinos en Israel; para los palestinos, es un «muro de la vergüenza» que separará familias, localidades, tierras y cultivos, e impedirá el acceso a las mezquitas de Jerusalén. La construcción no sigue la línea verde

(la frontera de 1967), sino que se adentra en Cisjordania para proteger determinados asentamientos israelíes y aisla a localidades palestinas de sus tierras y vecinos. Según el Ministerio de Defensa y fuentes militares israelíes, el muro estará acabado en 2005, y tendrá una longitud de unos 750 km (a finales de 2003 se habían construido 150 km) y una altura de 8 m. La base de las paredes es de hormigón y cemento, pero dispone de equipos electrónicos de vigilancia, trincheras, alambradas electrificadas y campos de arena preparados para detectar pisadas. Costará unos 1.600 millones de euros. El muro dejará a unos 12.000 palestinos en tierra de nadie –entre la línea verde y la fortificación–, y otros 95.000 se quedarán en su lado israelí. Su construcción ha sido denunciada por la ONU y criticada por EE UU, que la considera un obstáculo para la aplicación de la Hoja de Ruta. Sin embargo, Washington no se ha opuesto a él de forma contundente.

Para la población palestina, la construcción de nuevos asentamientos y del muro supone revivir la experiencia de *Al-Nakba* (el desastre), la expulsión de 1948, cuando unas 500 localidades palestinas fueron destruidas o desalojadas, y entre 600.000 y 800.000 árabes de Palestina se vieron obligados a emprender el camino del exilio. El muro y las colonias son también la plasmación visual más evidente de la ocupación y la humillación y, sin duda, generan un rechazo fácilmente manipulable por parte de los grupos más radicales y violentos. En otras palabras, para muchos analistas la política agresiva y militar de Ariel Sharon alimenta la desesperación palestina y brinda argumentos a los partidarios de la violencia. Asimismo, los cambios políticos han incidido en el conflicto y en la sociedad palestina durante el período. En primer lugar, cabe citar el aplazamiento de las elecciones palestinas, previstas para enero de 2003, porque la reocupación y el asedio del ejército israelí impedían celebrarlas con normalidad y libertad. En segundo lugar, el final del Gobierno de unidad en Israel con la salida del Partido Laborista del mismo (octubre de 2002), la convocatoria de elecciones anticipadas, y la victoria de Ariel Sharon y del Likud (28 de enero de 2003) en unas elecciones que conta-

ron con la participación más baja (un 68 %) de toda la historia electoral de Israel. En tercer lugar, cediendo a las presiones de Israel y de EE UU, el nombramiento por parte de Arafat de un primer ministro (19 de marzo de 2003), Mahmoud Abbas (Abu Mazen), quien, al no conseguir el control de las fuerzas de seguridad palestinas, dimitió el 6 de septiembre. En cuarto lugar, tras muchas negociaciones y aplazamientos, la presentación de la Hoja de Ruta del Cuarteto (30 de abril de 2003), que se propone trazar un nuevo proceso de paz y llegar a la proclamación de un Estado palestino independiente en 2005. La ANP e Israel aceptaban la Hoja de Ruta y, en el mes de mayo, reemprendían unas negociaciones públicas y oficiales que habían interrumpido después del estallido de la segunda Intifada (en septiembre de 2000) y de Taba (enero de 2001). Por último, no podemos dejar de señalar el deterioro de la economía israelí (caída del turismo, de las inversiones y aumento del paro) y sobre todo de la palestina. En este último caso, con la operación militar Muro Defensivo ordenada por Ariel Sharon en marzo de 2002, la actividad económica productiva en los territorios ocupados prácticamente cesó, pasando del estancamiento y recesión que se vivía desde el inicio de la Intifada de Al-Aqsa a la parálisis total. En conclusión, el periodo revisado no invita al optimismo; hoy, la solución al conflicto parece estar más lejos que ayer. Tan sólo el cansancio y la reacción de dos sociedades conmocionadas por la violencia podrán, en un futuro que debería estar próximo, hallar una salida al conflicto. De hecho, los índices de opinión indican que cada vez hay más personas partidarias de llegar a una paz negociada tanto en Israel como en los territorios ocupados. ¡Ojalá sea así! Pero entonces aún adquirirían un mayor dramatismo las palabras pronunciadas por Saeb Erekat, el sempiterno negociador palestino, cuando, a raíz del fracaso de las últimas negociaciones (Tabá, enero de 2001), afirmaba que «la única diferencia entre el momento actual y el momento en que se llegue a un acuerdo radicarán en la cantidad de nombres palestinos e israelíes que se deberán añadir a la lista de la muerte y del dolor. Y al final llegará la paz».